



SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, diecisiete (17) de junio de dos mil veintidós (2022)

Proyecto discutido y aprobado en sala virtual

Demandante: CENIA ROSA OCAMPO DE MURILLO
Demandados: ACP COLPENSIONES y PORVENIR S.A.
Radicado: 05001 31 05 020 2020 0227 01
Sentencia: S-151

AUTO

Se accede a la sustitución de poder presentada por la apoderada judicial de COLPENSIONES, Dra. VICTORIA ANGÉLICA FOLLECO ERASO, a favor del Dr. JUAN ESTEBAN GALEANO CORREA, quien se identifica con T.P. N° 312.539 del C. S. de la Judicatura; en consecuencia, se le reconoce personería judicial para actuar en los mismos términos que a la apoderada principal.

De otro lado, en atención a la escritura pública 2291 del 23 de agosto de 2021 allegada al expediente, así como la inscripción en el certificado de existencia y representación legal de la sociedad GODOY CÓRDOBA ABOGADOS S.A.S., se le reconoce personería como apoderada judicial de PORVENIR S.A. a la Dra. MARÍA ALEJANDRA RAMÍREZ OLEA, T.P. 359.508 del C. S. de la Judicatura.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

En la fecha indicada, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, integrada por los Magistrados JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ quien obra en éste acto en calidad de ponente, FRANCISCO

ARANGO TORRES y JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, procede a resolver los recursos de apelación interpuestos por las entidades codemandadas, al igual que el grado jurisdiccional de Consulta concedido a favor de COLPENSIONES en los aspectos no recurridos, con motivo de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Medellín el día 4 de agosto de 2021.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita, aprobada previamente por los integrantes de la Sala.

PRETENSIONES:

CENIA ROSA OCAMPO DE MURILLO demandó a PORVENIR S.A. y a COLPENSIONES, pretendiendo se declare la ineficacia o nulidad del traslado efectuado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, disponiéndose su retorno a COLPENSIONES sin solución de continuidad, con la consecuente orden de trasladar los aportes de la cuenta de ahorro individual junto con los rendimientos financieros. Pretende además se condene en costas a las entidades demandadas.

LOS HECHOS:

Expone como fundamento de sus peticiones, que nació el 4 de diciembre de 1959; que se afilió al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a partir del 1 de agosto de 1995 cuando laboraba al servicio de la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE, completando un total de 456 semanas de cotización; que se trasladó a la AFP PORVENIR S.A. el 1 de mayo de 1998 motivada en el hecho de que los asesores de esa entidad le dijeron que podría acceder a una pensión de vejez a cualquier edad, omitiendo informar las condiciones necesarias para ello; que nunca se le informó la edad y saldo que debía acreditar para acceder a una pensión de vejez, ni las

ventajas o desventajas de trasladarse de régimen pensional; que en general esa asesoría brindada no fue adecuada, suficiente, clara comprensible y cierta con respecto a las consecuencias legales y económicas del traslado; que en toda su vida laboral tiene más de 1500 semanas cotizadas; y que una proyección actualizada de su situación pensional muestra como en PORVENIR S.A. obtendría una pensión equivalente a un salario mínimo, mientras que en COLPENSIONES podría llegar a ser de \$1'836.574.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA:

Al contestar, COLPENSIONES acepta la fecha de nacimiento de la demandante, su afiliación a esa entidad, el total de semanas cotizadas y el posterior traslado a la AFP PORVENIR S.A. Frente a los demás hechos dice que no le constan por tratarse de situaciones ajenas a su conocimiento. Se opuso además a las pretensiones indicando que la afiliación al RAIS se realizó en debida forma en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2º de la ley 797 de 2003. Como excepciones propuso inexistencia de la obligación de traslado entre regímenes pensionales, inexistencia de la obligación de reconocer y pagar la pensión de vejez e intereses moratorios, prevalencia de la autonomía de la voluntad privada, inoponibilidad de la responsabilidad de la AFP ante COLPENSIONES, falta de legitimación en la causa, prescripción, imposibilidad de condena en costas y buena fe.

PORVENIR S.A. a su turno, señala de manera general que no le consta ninguno de los hechos de la demanda, explicando que la afiliación a esa entidad se efectuó en el mes de mayo de 1999, momento en el cual se suministró una asesoría clara, cierta y comprensible, dando lugar a la afiliación de forma libre y voluntaria en cumplimiento de las obligaciones vigentes para esa época. Se opuso igualmente a las pretensiones de la demanda indicando que no se demostró causal que invalide la afiliación. Como excepciones

propuso prescripción, cobro de lo no debido por ausencia de causa, inexistencia de la obligación y buena fe.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:

Mediante sentencia del 4 de agosto de 2021, el Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Medellín DECLARÓ la ineficacia de la afiliación efectuada por la demandante al RAIS, ordenando en consecuencia a PORVENIR S.A. trasladar a COLPENSIONES la totalidad de aportes contenidos en la cuenta de ahorro individual junto con los rendimientos financieros, cuotas de administración, porcentajes de seguros previsionales y porcentaje destinado a la garantía de pensión mínima, así como a pagar las costas del proceso, cuyas agencias en derecho fueron fijadas en el equivalente a 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

DEL RECURSO DE APELACIÓN:

Inconforme con lo decidido, el apoderado de COLPENSIONES solicita revocar la sentencia proferida en primera instancia, ya que es un tercero ajeno a ese negocio jurídico y no se puede ver perjudicado en el error en el cual incurriera la parte demandante, y es la AFP la que debe afrontar la carga de la prestación, ya que la ineficacia del traslado fue ocasionada por la conducta indebida de PORVENIR. En cuanto a las cuotas de administración, de ratificarse la declaratoria de ineficacia es la AFP la encargada de devolver todos los conceptos a cargo de su propio patrimonio.

A su turno, el apoderado de PORVENIR S.A. indicó que no existió nulidad ni ineficacia de la afiliación, para lo cual cita concepto de la Súper Intendencia financiera del 30 de diciembre de 2015 en el sentido de que para esa época no existía la obligación de suministrar la información de la forma que se exige. De otro lado, los gastos de administración están establecidos en la ley y fueron descontados en

cumplimiento de un deber legal según el artículo 20 de la Ley 100 de 1993, por lo que no estaría justificada la orden de devolver estos aportes al haber sido destinados según lo establecido en la misma norma.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN:

En esta instancia, una vez surtido el traslado respectivo, el apoderado de COLPENSIONES señala que al análisis de la información suministrada por PORVENIR S.A. y el alcance de la asesoría que debió brindar al momento de la afiliación, deberán ser valoradas bajo la normatividad vigente para la fecha en que se suscribió el formulario de afiliación o de la materialización del traslado, que, para el caso en concreto, atendiendo a la fecha en que se realizó el traslado, no era tan exigente, por lo que la asesoría fue acorde a las exigencias legales para el momento, no habiendo causal de ineficacia. En caso de que no sean tenidas en cuenta las anteriores apreciaciones, deberá confirmarse la sentencia en el sentido de ordenar el traslado de todos los recursos que posee la demandante en su cuenta de ahorro individual, así como las cuotas de administración, la garantía de pensión mínima, valores de reaseguros o seguros provisionales y rendimientos financieros, con todos sus frutos e intereses debidamente indexados, lo anterior conforme al principio de la estabilidad financiera consagrado en el artículo 334 de la Constitución Política Colombiana.

La parte demandante insiste en que no queda duda que las entidades que administran el régimen de ahorro individual, no sólo tienen el deber sino la obligación de brindar asesoría personalizada, completa, y eficaz, con el fin de entregar al afiliado toda la información necesaria para que éste tome la mejor decisión, en la medida en que es ella la que cuenta con el conocimiento de la normatividad que regula el Régimen con sus características particulares, la formación en materia financiera y la experiencia, mientras que el ciudadano que

pretende afiliarse, ignora tales detalles y confía plenamente en que recibirá la asesoría adecuada y completa, para de ese modo tomar una decisión informada, libre y voluntaria; respecto a este deber de información se tiene que a la demandante no se le brindó la asesoría adecuada, aspecto que comparte con el *a quo*.

PORVENIR S.A. por su parte, sostiene que no existían razones fácticas o jurídicas para declarar la ineficacia del traslado al Régimen de Ahorro Individual, pues la decisión de la parte actora se realizó de forma espontánea, sin presiones o apremios de alguna naturaleza y cumpliendo los requisitos exigidos en la ley. Asegura que al momento de realizar el traslado cumplió con su deber de información establecido para la época en el artículo 97 del Decreto 663 de 1993, pues le entregó a la parte actora la información del Régimen en diferentes momentos, esto es, de manera verbal en una reunión general y colectiva, y de forma personal al momento de suscribir el formulario de afiliación. Agrega que la obligación del buen consejo, la doble asesoría, e incluso la de desincentivar la afiliación, son obligaciones posteriores, surgidas a partir de los años 2010 y 2014. De mantenerse la declaratoria de ineficacia de traslado, solicita no se condene al traslado de los dineros descontados por gastos de administración, especialmente por tener una destinación específica conforme lo dispone el artículo 20 de la ley 100 de 1993.

CONSIDERACIONES:

Corresponderá en esta instancia resolver los temas propuestos por los apoderados de las entidades codemandadas a través de sus respectivos recursos de apelación, al igual que conocer del proceso vía grado jurisdiccional de CONSULTA a favor de COLPENSIONES en lo no recurrido, lo que implica revisar la legalidad de la sentencia proferida en primera instancia mediante la cual se declaró la ineficacia de la afiliación de la Sra. CENIA ROSA OCAMPO DE MURILLO realizada

al RAIS, así como las ordenes consecuenciales respecto a los dineros que PORVENIR S.A. queda en la obligación de trasladar.

Entre los hechos que a esta altura del proceso han quedado plenamente acreditados, se tiene que: *i)* CENIA ROSA OCAMPO DE MURILLO nació el 4 de diciembre de 1959; *ii)* se afilió por primera vez al sistema pensional ante el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y comenzó a realizar cotizaciones el 1 de agosto de 1995, acumulando un total de 184.29 semanas; y *iii)* el 2 de marzo de 1999 suscribió el respectivo formulario de afiliación a AFP PORVENIR S.A., entidad en la que se encuentra vinculada actualmente.

Ahora, según viene de verse, lo que pretende la demandante con la presente acción judicial, es que se declare ineficaz su traslado al RAIS administrado por la AFP PORVENIR S.A., para que, consecuentemente, se declare que su afiliación válida es la que corresponde a COLPENSIONES, con apoyo en que recibió un asesoramiento insuficiente e inadecuado por parte de los promotores del fondo privado, dado que, al momento de tramitar el traslado, no se tuvo en cuenta su situación particular, lo que ocasionó que abandonara un régimen que claramente le era más favorable.

Al respecto, importa reiterar, tal y como ha sido dicho en múltiples providencias en las cuales se ha dirimido el tema de la ineficacia del traslado efectuado del Régimen de Prima Media con Prestación Definida al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, que la jurisprudencia laboral ha sido consistente, reiterada y uniforme desde el año 2008, en señalar que el deber de información a cargo de las administradoras de fondos de pensiones, amplio y suficiente, es un deber exigible desde su creación.

Así lo señaló desde las sentencias 31.989 y 31.314 ambas del 9 de septiembre de 2008, cuyas consideraciones se han venido renovando con el transcurso de los años, y en el año 2019 la tesis fue afianzada,

como puede verse, entre otras, en las sentencias SL 1421, SL 1452, SL 1688 y SL 1689, todas, se repite del 2019. Como sentencia-hito sobre el tema, cabe destacar lo que se dijo en aquella primera providencia, la Rad. N° 31.989 de 2008:

“Las administradoras de pensiones tienen el deber de proporcionar a sus interesados una información completa y comprensible, a la medida de la asimetría que se ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego, en materias de alta complejidad. Es una información que se ha de proporcionar con la prudencia de quien sabe que ella tiene el valor y el alcance de orientar al potencial afiliado o a quien ya lo está, y que cuando se trata de asuntos de consecuencias mayúsculas y vitales, como en el sub lite, la elección del régimen pensional, trasciende el simple deber de información, y como emanación del mismo reglamento de la seguridad social, la administradora tiene el deber del buen consejo, que la compromete a un ejercicio más activo al proporcionar la información, de ilustración suficiente dando a conocer las diferentes alternativas, con sus beneficios e inconvenientes, y aún a llegar, si ese fuere el caso, a desanimar al interesado de tomar una opción que claramente le perjudica.”

En la SL 1452-2019, Rad. 68852 del 3 de abril de 2019, la Corte Suprema de Justicia robusteció el criterio que apunta a considerar, como ejes claves para la declaratoria de la ineficacia del traslado, los siguientes: (i) el juez debe constatar el deber de información como un elemento ineludible de la ineficacia del acto jurídico; (ii) que el simple consentimiento vertido en el formulario de afiliación, es insuficiente, pues se requiere en todo caso la prueba del consentimiento informado; (iii) que le incumbe a la respectiva AFP del RAIS, por inversión de la carga de la prueba, demostrar que en el momento del traslado le suministró al afiliado (a) la información suficiente y completa sobre las consecuencias de tal decisión, en los términos del artículo 1604 del Código Civil, según el cual, la prueba de la diligencia y cuidado incumbe a quien debió emplearlo; y (iv) que no es necesario estar a portas de causar el derecho o tener un derecho consolidado para que se produzca la ineficacia del traslado.

En la misma providencia, se analizaron los diferentes estadios de la evolución normativa respecto de esta exigencia, cada uno de ellos con regulaciones propias que apuntan a la misma finalidad en cuanto a la garantía para el afiliado de su derecho a una debida información, bien al momento de elegir el régimen pensional, ora cuando opte por trasladarse de régimen. Exigencias que se tornan cada vez más rigurosas, así:

1. Partiendo de una primera fase, compuesta por aquellas disposiciones que se derivaron de la Ley 100 de 1993, en sus artículos 13 literal b), 271 y 272, así como el decreto 663 de 1993 o Decreto Orgánico del Sistema Financiero, el cual incluye los fondos de pensiones, momento para el cual, el alcance mínimo del deber de información incluía la ilustración de *“las características, condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales, lo que incluye dar a conocer la existencia de un régimen de transición y la eventual pérdida de beneficios pensionales”*
2. Vino luego una segunda etapa a partir de la expedición de la Ley 1328 de 2009 y el decreto 2241 de 2010, caracterizado porque obligó al análisis previo, calificado y global de los antecedentes del afiliado y de los pormenores de los regímenes pensionales, Y
3. Un tercer periodo que viene dado desde la Ley 1748 de 2014 y el decreto 2071 de 2015, tildada como la ley de doble asesoría, el cual lleva inmerso el derecho a obtener asesoría de los representantes de ambos regímenes pensionales.

En el presente caso, no se evidencia prueba alguna que permita tener por acreditado que el fondo privado realizó en ese momento un análisis integral de las condiciones concretas y subjetivas de la afiliada, con expresión de las ventajas y desventajas de ambos regímenes y su incidencia en su caso particular, de tal manera que esta pudiera tener un panorama claro de sus futuras expectativas.

Esto es, incumplió el Fondo privado su deber de información a la afiliada, al no suministrarle, “en forma clara y precisa, las características, condiciones, consecuencias y riesgos del cambio de régimen” (SL 1689-2019)

El simple hecho de que se haya suscrito un formulario de afiliación de ninguna manera puede significar que con ello la entidad cumplió con su obligación de suministrar una información completa, precisa, adecuada y oportuna, relacionada con las ventajas y desventajas de permanecer en el ISS o trasladarse al fondo privado. Dicho documento no contempla un análisis de su caso en particular que contenga una proyección de su situación pensional concreta y específica, en uno u otro régimen, sino que simplemente se trata de un formato preestablecido, en el cual solo hace constar que tomó la decisión de manera espontánea y sin presiones, cuestión, que, en rigor, no se está controvirtiendo en este evento. También a este respecto se ha pronunciado la jurisprudencia ordinaria, v. gr. sentencia SL 19447-2017:

*“Ese mismo compendio normativo, en su precepto 98 indica que al ser, entre otras las AFP entidades que desarrollan actividades de interés público, deben emplear la debida diligencia en la prestación de los servicios, y que «en la celebración de las operaciones propias de su objeto dichas instituciones deberán abstenerse de convertir cláusulas que por su carácter exorbitante puedan afectar el equilibrio del contrato o dar lugar a un abuso de posición dominante», es decir, **no se trataba únicamente de completar un formato, ni adherirse a una cláusula genérica, sino de haber tenido los elementos de juicio suficientes para advertir la trascendencia de la decisión adoptada, tanto en el cambio de prima media al de ahorro individual con solidaridad, encontrándose o no la persona en transición, aspecto que soslayó el juzgador al definir la controversia, pues halló suficiente una firma en un formulario [...].***

Lo anterior permite dar aplicación al artículo 271 de la ley 100 de 1993 en el sentido de que cuando el empleador o cualquier persona natural o jurídica atente en cualquier forma contra el derecho del

trabajador a su afiliación y selección de instituciones del Sistema de Seguridad Social como lo son las AFP, *"La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador"*.

Ahora bien; tampoco es de recibo el argumento de COLPENSIONES en cuanto solicita considerar las implicaciones económicas que se pueden llegar a generar con decisiones como esta, especialmente por existir una eventual afectación a la sostenibilidad financiera del sistema más cuando no participó en el acto de traslado.

Al respecto, la Sala ha considerado que las decisiones judiciales deben estar fundamentadas en las normas legales que rigen la materia, en este caso las del Sistema de Seguridad Social Integral, sin que el Juez pueda entrar a considerar situaciones como las implicaciones económicas que aquellas puedan tener, ya que ello es competencia del legislador al momento de la expedición de la ley.

Adicionalmente, el regreso de la demandante a COLPENSIONES no implica que necesariamente vaya a haber una afectación al sistema, pues a dicho fondo le llegan los dineros que la demandante alcanzó a acumular en su cuenta pensional de PORVENIR S.A. junto con los rendimientos financieros y todos aquellos conceptos recibidos por administración de los recursos, seguros y garantía de pensión mínima como más adelante se verá, sin que esté probado en el proceso que no sea posible financiar la pensión a la que pueda llegar a acceder.

En consecuencia, en este puntual aspecto se confirmará la decisión adoptada en primera instancia.

De otro lado, en cuanto a decisión de ordenar también la devolución de las cuotas de administración, seguros previsionales y demás conceptos, tema cuestionado en el recurso de apelación por PORVENIR S.A., basta con indicar que la Sala ha considerado en

múltiples pronunciamientos, que es factible ordenar a la AFP correspondiente, que proceda con la devolución a COLPENSIONES de todas las sumas recibidas con ocasión de la afiliación de cada persona, teniendo en cuenta que no es ello más que una consecuencia natural de la ineficacia del traslado, en tanto el estado de cosas vuelve a su situación anterior, como si el acto nunca hubiera existido.

Criterio que ha adoptado acogiendo lo que en tal sentido ha indicado en reiteradas oportunidades la SCL de la Corte Suprema de Justicia, como por ejemplo en las sentencias SL 31989 - 2008; SL 4964 de 2018, SL 4989 de 2018, SL 1421 de 2019, SL 1688 de 2019, rad. 68838 de mayo 8 de 2019, o más recientemente la SL 2877 del 29 de julio de 2020, rad. 78667. En esta última dijo expresamente lo siguiente:

*“Entonces, según la norma precedente, el efecto de la declaratoria de ineficacia es retrotraer las cosas al estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato declarado ineficaz, a través de las restituciones mutuas que deban hacer los contratantes, que debe decretar el juez y para lo cual se fijan unas reglas en tal disposición. En otros términos, **la sentencia que en tal sentido se dicte, tiene efectos retroactivos y, en virtud de ellos, cada una de las partes debe devolver a la otra lo que recibió con ocasión del negocio jurídico que trasgredió las prescripciones legales**, toda vez que este no produce efectos entre ellas y el vínculo que se entendía que había, lo rompió tal providencia.*

(...)

*En el sub lite, **la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos**, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho el demandante en el régimen de prima media con prestación definida. **Ello, incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima**, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional.*

(...)

Conforme lo anterior, el Tribunal acertó en cuanto estableció que los fondos privados accionados deben retornar a Colpensiones la totalidad de los valores recibidos por concepto de «aportes, frutos, rendimientos financieros y bonos pensionales que se encuentran en la cuenta de ahorro individual», sin descontar valor alguno por «cuotas de administración, comisiones y aportes al fondo de garantía de pensión mínima" (Resaltado por la Sala)

Si bien es cierto por regla general los actos jurídicos son celebrados para que sean eficaces y produzcan efectos jurídicos propios, cuando tales actos jurídicos no resultan eficaces, por haber nacido viciados en el sentido amplio del término, desde el comienzo o incluso porque llegan a desaparecer por un evento posterior a la celebración del acto, se traduce en que nunca produjeron efectos o que habiéndolos producido dejan de generarlos por una causal sobreviniente a la celebración del acto jurídico. En el primer evento, esto es, cuando se considera que el acto nunca produjo efectos, como en este caso acontece, las cosas vuelven a su estado anterior, como si aquel jamás hubiera nacido a la vida jurídica.

Todo lo anterior sin que sea procedente la indexación según se solicita en los alegatos de conclusión presentados en esta instancia por COLPENSIONES, pues se trata de una cuestión que debió plantearse en la contestación de la demanda o cuando menos en el recurso de apelación, de manera que una decisión en tal sentido implicaría decidir más allá de lo pedido, lo que no resulta procedente en sentencias de segunda instancia.

En consecuencia, la decisión de primera instancia deberá ser CONFIRMADA.

Costas en esta instancia por haber resultado vencidas en el recurso, a cargo de COLPENSIONES y PORVENIR S.A. y a favor de la demandante, cuyas agencias en derecho se fijan en la suma de \$1`000.000 a cargo de cada una de ellas.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

R E S U E L V E:

CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Medellín el día 4 de agosto de 2021.

Costas en esta instancia por haber resultado vencidas en el recurso, a cargo de COLPENSIONES y PORVENIR S.A. y a favor de la demandante, cuyas agencias en derecho se fijan en la suma de \$1`000.000 a cargo de cada una de ellas.

Notifíquese por EDICTO.

Firmado Por:

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **1451e91b13657b4dbee2fce54c32b51429a4594dc88483271e1e137c95a21801**

Documento generado en 17/06/2022 01:27:31 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>